Quito, 5 de febrero del 2024.

CAUSA Nro. 1564-19-EP

Señor Doctor

Jhoel Escudero Soliz

JUEZ SUSTANCIADOR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

En su despacho.-

DRA. MIRIAM JANETH RODRIGUEZ CHIRÁN, Jueza de la Unidad Judicial de Tránsito, con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, dentro del caso Nro. 1564-19-EP, Acción Extraordinaria de Protección, a Usted respetuosamente comparezco y digo:

Dando cumplimiento al auto de fecha 01 de febrero de 2024, mismo que si bien es cierto no me ha sido notificado a mi correo institucional miriam.rodriguez@funcionjudicial.gob.ec, sin embargo al haber tenido conocimiento del mismo a través de la actuario de mi Judicatura, a quien se le ha hecho llegar tal requerimiento mediante correo institucional el día 01 de febrero del 2024, remitido por el Abg. Carlos Alberto Aguirre Guanín, actuario de la Corte Constitucional, procedo a remitir el siguiente Informe de descargo, respecto a la acción de acceso a la información Nro. 17460-2019-01452, en base a las siguientes consideraciones:

1.- Con fecha 20 de marzo del 2019, en esta Unidad Judicial de Tránsito con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, los señores Silva Narvaez Dalai Piragov, Vallejo Perez Roger Andres, y Palaquibay Sanango Fabricio Alexander, han presentado una acción de acceso a la información, en contra de la señora Lourdes Berenice Cordero Molina, Ministra de Inclusión Económica y Social, y del Dr. Iñigo Salvador Crespo, Procurador General del Estado, misma que ha sido signada con el Nro. 17460-2019-01452.

2.- Con fecha 21 de marzo del 2019, a las 15h33, la suscrita avoqué conocimiento de la acción de acceso a la información Nro. 17460-2019-01452, y una vez calificada y admitida convoqué a la audiencia oral, pública y contradictoria para el día 28 de marzo del 2019, a las 14h30. En dicha diligencia y siendo el momento de resolver, emití de manera oral la respectiva resolución, mediante la cual negué la petición de acción de acceso a la información, resolución que de manera escrita fue notificada el día 8 de abril del 2019, a las 16h14.

3.- La resolución oral fue apelada en la misma audiencia por no encontrarse de acuerdo los accionantes, y tal recurso interpuesto fue considerado en la sentencia escrita, disponiendo que se remita el expediente a la Corte Provincial de Justicia de Pichincha para los fines pertinentes.

4.- Con fecha 22 de abril del 2019, las 10h25, en la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, se ha producido el sorteo de Ley, recayendo su conocimiento a la Sala de la Familia, Mujer, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Pichincha, conformada por los señores Jueces Doctores José Cristóbal Valle Torres (ponente), Fausto René Chávez Chávez y Darwin Eugenio Aguilar Gordon, quienes, rechazan el recurso de apelación planteado por el accionante y ratifican mi sentencia.

5.- Respecto de la alegación de los accionantes, que mediante la Acción Extraordinaria de Protección, han puesto en su conocimiento, he de manifestar lo siguiente: A pesar de que la sentencia impugnada ha sido la emitida por la Sala de la Familia, Mujer, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Pichincha, los accionantes aducen que la Jueza a quo en mi sentencia he violentado *“los derechos constitucionales de la Seguridad Jurídica y el Derecho al debido proceso en garantía del cumplimiento de normas y derechos de las partes establecido en el Art. 76 numeral 1 de la Constitución.”*, debo contestar entonces que, es justamente en aplicación y respeto de estos derechos constitucionales como el de la Seguridad Jurídica y Debido proceso, que la suscrita emití mi sentencia debidamente motivada, desembocando en la negativa de la acción de acceso a la información planteada por los legitimados activos. En cuanto al derecho al Debido Proceso, al que se han referido los accionantes, contemplado en el 76 numeral 1 de la Constitución de la República, que prescribe:

“Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes.”. debo indicar que la suscrita en mi sentencia analicé el derecho de acceso a la información que los accionantes consideraron se les ha vulnerado, pues en el considerando **“4.3 ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE ACCIÓN DE ACCESO A LA INFORMACION”**, de mi sentencia escrita, puede evidenciarse que la petición de los señores DALAI PIRAGOV SILVA NARVÁEZ, ROGER ANDRÉS VALLEJO PÉREZ y FABRICIO ALEXANDER PALAQUIBAY SANANGO ha sido presentada mediante oficio Nro. D012-01SA-2019-012, con fecha 20 de febrero de 2019, solicitando copias certificadas del registro de Directiva; Así mismo se puede verificar en el mismo considerando que la entidad accionada contestó: *“...la solicitud en referencia no ha sido ingresada en la plataforma gubernamental, ya que dicha petición está dirigida a la señora Lourdes Berenice Cordero Molina, Ministra de Economía e inclusión social, por lo que los accionados no han tenido conocimiento de la petición, más sin embargo, que los accionados sabían perfectamente que dicha petición debían presentarla en la plataforma gubernamental puesto que ya han presentado otra peticiones en dicha entidad, y han sido atendidos en sus peticiones. Que al haberse enterado de la presente acción de acceso a la información presentaron e incorporaron en esta audiencia, las copias certificadas solicitadas, sin tener el ánimo de allanarse a la Acción planteada en su contra...”*, hechos que fueron documentadamente fundamentados, conforme los respaldos constante en el expediente, además que dichas afirmaciones fueron recogidas por los señores Jueces de la Sala de la Familia, Mujer, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Pichincha, para su resolución, quienes de igual manera realizaron su análisis en base a estas mismas argumentaciones y documentación aportadas, tanto por los legitimados activos, cuanto por los legitimados pasivos, llegando a rechazar el recurso de apelación interpuesto por los accionantes y ratificando mi sentencia. Velando justamente por los derechos de los accionados, también en mi análisis me remití a norma expresa como la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, norma que los mismos legitimados activos aplicaron en su requerimiento de copias certificadas, así también me remití a pronunciamientos constitucionales a través de las sentencias Nro. 256-17-SEP-CC-de 16 de agosto de 2017, caso Nro. 1553-12-EP y 016-13-SEP-CC de 16 de mayo de 2013

caso número 1000-12-EP, y sobre todo en aplicación al Art. 82 de la Constitución de la República que prescribe: “...*El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes*”, Mandato constitucional que lo he cumplido a cabalidad, sin restricción de ningún derecho constitucional, mucho menos de los derechos que los legitimados activos han alegado, por lo que las aseveraciones de los señores DALAI PIRAGOV SILVA NARVÁEZ y ROGER ANDRÉS VALLEJO PÉREZ, se encuentran totalmente alejadas a la realidad de los hechos y del derecho constitucional.

6.- Respecto de que mi Resolución ha sido emitida de manera extemporánea, como queda anotado en el numeral 2 de este informe, la resolución oral la emití el mismo día de la audiencia oral y pública de acción de acceso a la información, realizada el día 28 de marzo del 2019, a las 14h30, sin embargo, en observancia a los principios de verdad procesal, debo manifestar que la misma fue notificada el 08 de abril del mismo año, por ocupación propias del despacho y turnos de flagrancia, lo cual de ninguna manera ha sido atentatorio a los derechos constitucionales de los legitimados activos. Cabe dejar sentado señor Juez sustanciador de la Corte Constitucional que, desde que la acción de acceso a la información llegó a mi conocimiento, se han aplicado los principios de celeridad y debida diligencia contemplados en el Código Orgánico de la Función Judicial, desde la calificación y admisión de la demanda, convocatoria a audiencia, realización de la audiencia y emisión de la resolución oral, pudiendo haberla suspendido conforme me faculta el inciso tercero del Art. 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, de creerlo necesario, sin embargo la resolución la emití en la misma audiencia al tener claro las pretensiones de los accionantes, y al haber formado criterio para poder emitir mi resolución oral como lo hice.

Por todo lo expuesto, mi sentencia dentro de la acción de acceso de información Nro. 17460-2019-01452, ha sido emitida dentro de los parámetros constitucionales, con apego a las garantías del debido proceso, Art. 76; en concordancia con la Tutela Judicial Efectiva y Seguridad Jurídica, Art. 75 y 82 de la Constitución de la República, sin violación de ninguno de los derechos constitucionales alegados por los señores DALAI PIRAGOV SILVA NARVÁEZ y ROGER ANDRÉS VALLEJO PÉREZ.

Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad.

Notificaciones que me correspondan las recibiré en mi correo institucional
mirim.rodriguez@funcionjudicial.gob.ec y/o correo personal
mjaneth_rodriguezch@hotmail.com.

Atentamente,

MIRIAM JANETH Firmado digitalmente por MIRIAM
RODRIGUEZ CHIRAN JANETH RODRIGUEZ CHIRAN
Fecha: 2024.02.05 18:32:21 -05'00'

Dra. Miriam Janeth Rodriguez Chirán
JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL DE TRÁNSITO
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.